

En la mañana del 20 de diciembre de 1973, pocos minutos después de conocido el magnicidio que le costó la vida al almirante Carrero Blanco, alguien entró en su despacho y vació la caja fuerte en la que el presidente guardaba las notas personales y los documentos más confidenciales. Quién fuese, aún hoy se ignora, pero es seguro que se trató de alguien con mando en plaza. Gonzalo Fernández de la Mora aseguró que esa mañana una persona ya había llegado a esas tempranas horas a presidencia: Laureano López Rodó, hombre muy cercano a Carrero y del que Julio Merino - que de esto sabe un rato - reveló que entregó dichos documentos a la viuda del almirante. Sea quien fuere, tuvo que atravesar la antesala, para él conocida, que comunicaba con el despacho del almirante y no pudo por menos que advertir los retratos del general Prim y de Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato, colgados en una de las paredes.

El de Carrero Blanco era el cuarto de los asesinatos de presidentes de gobierno cometidos en España en el lapso de 75 años, todos ellos - ni que decir tiene - ejecutados por la izquierda. El cuarto: un verdadero Guinness europeo. Cánovas, Canalejas y Dato precedieron al almirante en el dudoso listado de la palma martirial, que si no engrosó con otros ilustres nombres no fue porque nuestra pedagógica izquierda no lo intentase. Podríamos incluir, no sin justicia, el nombre del general Prim a fin de engrosar la factura que la nación debería pasar a esa izquierda - o a esas izquierdas - que hoy, enseñoreadas de la hegemonía cultural al gramsciano modo, legitima pasados.

El asesinato de Carrero es, empero, diferente al de los otros, aunque, al tiempo, sea imposible desvincularlo de ellos. Franco, desde su misma comisión, tuvo clara la autoría: “han sido los masones”. Y, al menos en eso, se asemejaba al de Prim. ¡Los masones! Muchas burlas se han hecho desde entonces sobre Franco y la masonería, todas ellas sin más base que la intención de ridiculizar al primero; pues lo cierto es que, si alguien sabía en España sobre masonería, ese era Franco.

¿Qué quería decir Franco al atribuir el magnicidio a “los masones”?

Evidentemente, no se estaba refiriendo a los autores materiales del asesinato, sino a los que movían los hilos de la conspiración, en la que se entremezclaban numerosos intereses de toda guisa. Pero, sobre todos esos intereses, aludía a aquel que había tomado la decisión. Al apuntar a “los masones” como responsables, estaba señalando que la autoría intelectual radicaba en instancias foráneas; las logias españolas, como bien sabía Franco, no han sido nunca más que una correa de transmisión de los intereses sajones en la que los elementos locales han oficiado de fámulos.

Quienquiera que diese la orden había tenido la capacidad de conjurar en su ejecución - con su conocimiento o sin él - a los más variados actores: desde comunistas oportunamente desvinculados del partido como Eva Forest, hasta Simón Sánchez Montero, miembro del comité central del PCE y, por descontado, a los jóvenes asesinos del nacionalismo ultraizquierdista de ETA. Las intenciones de la izquierda extrema convergían con otros intereses en principio nada compatibles.

La reivindicación enviada a los medios por ETA tras el crimen reveló la notable estupidez política de la banda terrorista, hasta el punto de que Jesús María de Leizaola, el autodenominado “presidente de Euskadi” en el exilio, se negó a creer en la autoría de ETA, lo que motivó que esta tuviera que emitir un segundo comunicado insistiendo en ello. En dicho comunicado, los terroristas explicaban el asesinato por causas de índole nacional; matar a Carrero eliminaba toda posibilidad de continuidad del régimen, una línea argumental sostenida, seguramente no por casualidad, por una pléyade de periodistas y prohombres de nuestra izquierda patria. Una línea argumental que difícilmente puede dissociarse de una cierta legitimación del propio crimen.

El problema de dicha argumentación es su falsedad. Carrero nunca hubiera sido un serio problema para la Transición que habría de pilotar el rey del que él mismo había sido

principal valedor y que, a esa condición precisamente, debía su elección como sucesor de Franco. No se aventura lo más mínimo si se afirma que Carrero habría servido al nuevo monarca con la misma lealtad que a Franco había brindado: Juan Carlos estaba seguro, y así lo confesó en varias ocasiones, de que Carrero habría sido completamente obediente a su jefatura y que, de haberse suscitado algún importante desencuentro, el rey habría obtenido su dimisión sin resistencia. Porque los militares franquistas no se sublevaban; dimitían.

Desde el punto de vista del monarca, trocar a Carrero por Arias Navarro – al que calificó de “desastre sin paliativos”, y al que haría dimitir – no fue una buena idea. Con toda probabilidad, los primeros meses de la sucesión fueron más complicados por esta razón; Juan Carlos no encontró en él la colaboración que hubiera tenido, a buen seguro, de Carrero. Pero los comentaristas más “progresistas” han decidido ignorar deliberadamente que el almirante representaba al sector más cercano a la tecnocracia y al Opus Dei, y que en modo alguno tenía buena prensa entre lo que se conocería como “el bunker”, formado por una parte de los falangistas, sobre todo por los de la anterior generación, y por los nacional-católicos. De modo que la eliminación de Carrero podía ser un suceso adverso para el suave transcurrir del cambio de régimen. Pues, en el peor de los casos y de ser necesario, la eliminación de Carrero se habría producido por la vía más anodina de la dimisión o, todo lo más, del cese.

Para Juan Carlos, quien ya tenía en mente al ambicioso Adolfo Suárez como su hombre de futuro, lo esencial era que quien quisiera que heredase como jefe de gobierno se dejase hacer y, prontamente, cesar sin más resistencias. Por eso recibió con evidente disgusto la designación de Arias al frente del gobierno. Nadie tuvo en cuenta al futuro rey en el nombramiento, entre otras cosas porque quien se encargaba de tener en cuenta al rey en las decisiones políticas, acababa de ser asesinado.

Pero volvamos al asunto esencial: ¿qué quería decir Franco al atribuir el magnicidio a “los masones”?

A comienzos de ese año 1973, Carrero había hecho llegar a Franco un informe sobre los contactos del marqués de Villaverde con destacados miembros de la masonería europea, algo que disgustó a otros miembros de la familia Franco. Dado que el acusado era nada menos que el yerno del Caudillo, la atmósfera en El Pardo no podía por menos que enrarecerse. Se enrareció, y el aura de la sempiterna figura de Carrero comenzó a resquebrajarse. Ese fue el ambiente en el que medró Carlos Arias Navarro, encargado de la seguridad del almirante, y por tanto principal responsable de lo sucedido aquella mañana del 20 de diciembre; un Arias que, lejos de pagar políticamente por aquel error, fue inconcebiblemente nombrado sucesor del finado a instancias de sus protectores de El Pardo. De modo que, más allá del dolor por la desaparición de la persona, cierto sector de la familia Franco respiró aliviada con la desaparición del almirante.

Entre tanto, la investigación iba poniendo de relieve algunos aspectos particularmente tenebrosos de la conjura. Entre ellos, el que un inquietante personaje, del que desconocemos casi todo salvo que estaba ligado a la derecha – aunque no sabemos a cuál de todas – hizo de enlace entre ciertos intereses y los miembros de ETA, suministrando a los terroristas datos vitales para la comisión del crimen. Y es que varios grupos políticos – a los que no se puede encasillar en la izquierda – estaban también interesados en la desaparición de Carrero, como algunos demócratas radicales con peculiares ideas al respecto del futuro de España.

El de Carrero, en fin, es un magnicidio que, por la impericia desplegada por los más diversos agentes que intervinieron antes, durante y después, despierta tantas suspicacias como el de Prim. O más. Resulta punto menos que increíble que la policía, advertida en varias ocasiones y desde diferentes instancias, se negase contumazmente a investigar

pistas que podrían haber abortado el crimen; que el responsable de la seguridad fuese ascendido a presidente de gobierno; que los asesinos fueron amnistiados sin siquiera haber sido juzgados y condenados, requisitos obviamente imprescindibles para aplicar una amnistía; que altos mandos militares ordenaran detener y eliminar las investigaciones independientes que se hicieron en el seno del ejército; que, además, el sumario se haya perdido, y que no se haya vuelto a encontrar, aunque algún periodista asegura haber accedido a él; y que ese mismo periodista asegure que estaba “plagado de errores bestiales”.

Uno de los jueces declaró en una revista de gran tirada que la investigación solo aclaró quiénes fueron los autores materiales y que no se quiso ir más allá, al tiempo que negó que fuese dinamita el explosivo empleado (lo que dio pie a la más que posible circunstancia de que fuese, en realidad, C-4, de exclusiva patente y uso estadounidense); también afirmaba, con plena convicción, la existencia de una conjura en el seno del gobierno -un gobierno que había declarado el estado de excepción por una revuelta universitaria, pero que ahora se negaba a hacer lo mismo -; y que había razones para pensar que la CIA estaba detrás del magnicidio y, con seguridad, que estaba informada de lo que iba a suceder.

El papel de la CIA en el crimen - en un Madrid en el que la agencia actuaba sin apenas trabas - no ha sido esclarecido a día de hoy, pero es cada vez menos dudoso: son bien conocidos los vínculos entre Langley y el nacionalismo vasco, que no excluyeron a ETA. Por otro lado, los estadounidenses habían venido insistiendo desde la época de Truman en que Franco permitiese el proselitismo protestante; y ahora, veinte años más tarde y a través de Vernon Walters, en que tolerase la masonería o, al menos, no le hiciese la vida imposible. Walters conocía tanto como Carrero los vínculos del marqués de Villaverde con la masonería, y también que la familia Franco querían promover a Alfonso de Borbón como rey, en lugar de a Juan Carlos; lo que de ninguna forma quería era ver a Carrero al frente del gobierno. A Robert Hill, embajador de Washington en Madrid, Carrero le parecía “arcaico y retrógrado”, y el hombre menos adecuado para acompañar al nuevo monarca en su singladura.

Pero Carrero, que no habría aceptado fácilmente el sistema de partidos y mucho menos la legalización del comunismo o del separatismo, era un firme partidario de la soberanía nacional y, en consecuencia, del programa nuclear español, un asunto nada menor rematado por la negativa del presidente, en octubre de 1973, a que los estadounidenses usaran las bases en España durante la guerra del Yom Kippur. Carrero quería reformular las relaciones entre EEUU y Madrid, que juzgaba excesivamente favorables a los primeros, así que el 19 de diciembre, la víspera misma del atentado, se entrevistó con Henry Kissinger. En el séquito del secretario de estado figuraba William Nelson, responsable jefe de Operaciones Encubiertas de la CIA y cerebro de un sinfín de golpes de estado por todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica. Kissinger, decepcionado por la tozuda negativa de Carrero a plegarse a los intereses de Washington, salió para París esa misma tarde, sin que su agenda lo justificase.

José María Manrique nos recuerda el modus operandi de los norteamericanos, particularmente en el caso del asesinato de Aldo Moro, del que se ha escrito que, si el brazo criminal fue el de las Brigadas Rojas, el cerebro rector hay que buscarlo en la Red Gladio, es decir, en la rama gangsteril de la OTAN. Franco no ignoraba que Washington estaba detrás del fomento del separatismo en España durante las décadas anteriores, con el que esperaba sustituir al comunismo según el designio transicional proyectado en EEUU. Por eso, muy probablemente, dijo a su primo Franco Salgado que “todas las actividades que se han llevado a cabo contra nosotros han sido llevadas a cabo por organismos que recibían fondos de la CIA...”. Al hilo de esa afirmación, parece

esclarecerse a quiénes se refería Franco cuando atribuía la autoría del magnicidio a los masones.

Entre otras muchas cosas en esta obra que usted, amable lector, tiene entre manos, Manrique nos refresca la trascendencia de la influencia masónica en España; su impacto en nuestra historia contemporánea, del que muy pocos han querido saber; su protagonismo en las políticas de sometimiento nacional durante el siglo XIX, causa de tantos infortunios; su paternidad republicana, que nos abocó por dos veces a la disolución de España; su infiltración incluso en el seno del propio franquismo y en no pocas de sus superiores instancias; algo que llevó a ‘Ezquerria’, uno de los ejecutores del magnicidio, a reconocer: “Hombre, sí, tuvimos apoyos...¡joder que si tuvimos! Yo diría que prácticamente oficiales, vamos, que nos los pusieron a huevo...”.

Espero, amable lector, que haya tenido usted la paciencia de alcanzar el final de este prólogo y que, si algo en él ha suscitado su interés, considere que no es nada en comparación con lo que le aguarda en las páginas que siguen. Este libro, tan valiente e inteligentemente urdido por su autor, le suscitará muchas cuestiones que, a buen seguro, encontrarán en él respuesta. O que, al menos, le sugerirán inquietantes preguntas. Todo lo realmente importante del caso desfila por sus páginas, que nuestro autor remata con unos nada anecdóticos anexos.

Al final, seguro que usted se siente capaz de contestar la pregunta que, al poco de su dimisión, se formulaba Adolfo Suárez: “me voy de la presidencia sin saber si ETA cobraba en rublos o en dólares”. Y quizá, hasta de darle la razón a Franco cuando atribuía el magnicidio a los masones; a los autóctonos y, sobre todo, a los de fuera. Que ya sabemos en qué moneda cobraban.

Fernando Paz Cristóbal  
Historiador, profesor y escritor.